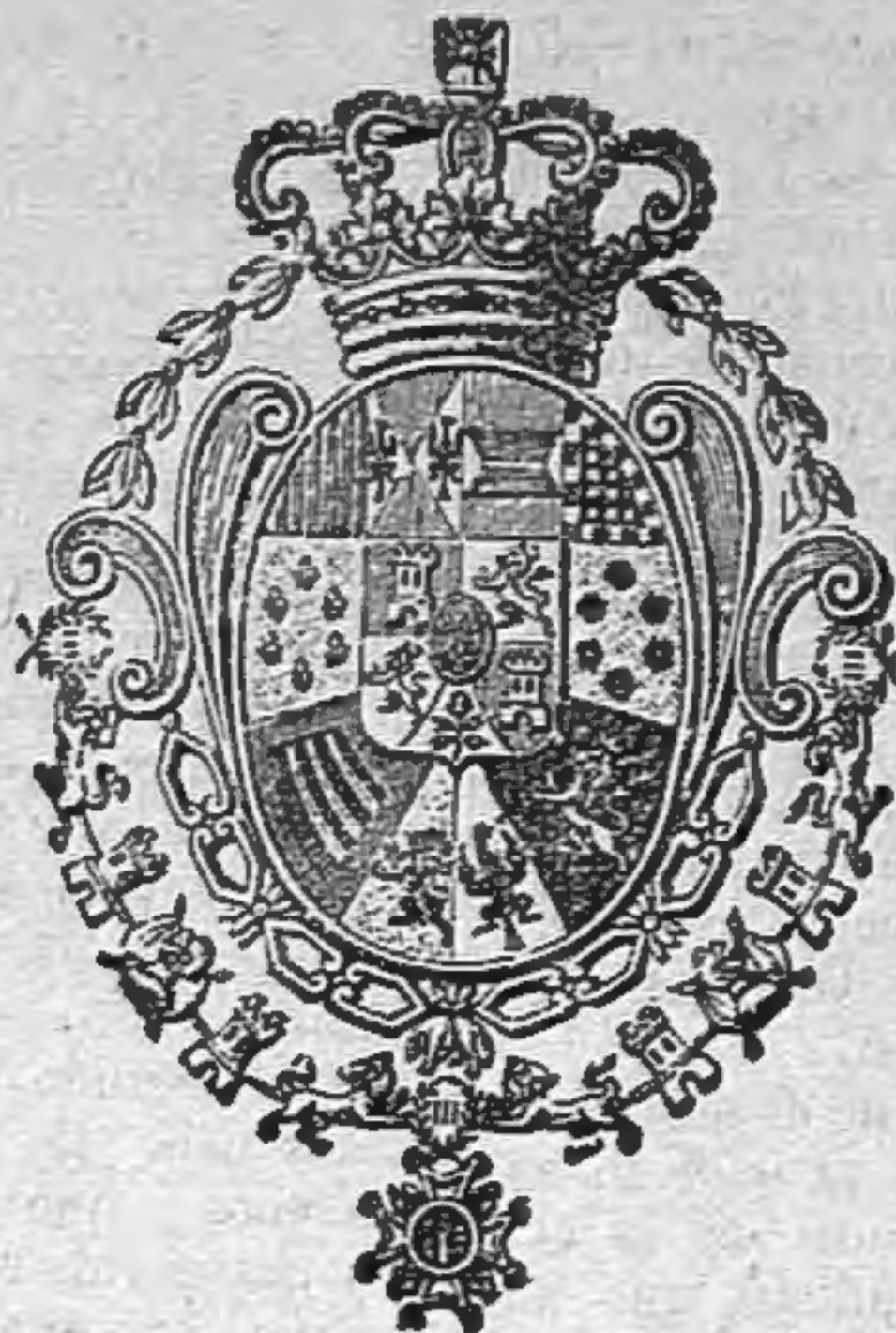


CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



SE PUBLICA TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS DOMINGOS

PRECIO DE SUSCRIPCION

Un trimestre dentro y
fuera de la capital. . . 5 ptas.
Números sueltos. 0'25
Se admiten suscripciones en la
Imprenta LA POPULAR, Orense.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte dias de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el dia en que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*.—(Artículo 1.º del Código civil).

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA
del
CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G.), y SS. AA. RR. la Princesa de Asturias é Infanta Doña María Teresa, continúan en el Real Sitio de Aranjuez, sin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfruta S. A. R. la Infanta Doña María Isabel tambien en aquel Real Sitio, adonde se trasladó en la tarde de ayer, en union de S. M. el Rey D. Francisco, que continúa aliviándose de las quemaduras que sufrió.

Gaceta núm. 128

REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Córdoba y el Juez de instrucción de Rute, de los cuales resulta:

Que en sesión celebrada por el Ayuntamiento de Palenciana en 6 de Junio de 1886 se acordó, a propuesta de un Concejal, nombrar una Comisión de individuos de la Corporación para que examinasen los libros de intervención y demás antecedentes relativos al arbitrio de 12 y medio céntimos de peseta impuesto sobre cada arroba de aceite que se extrajera de los molinos ó depósitos particulares; y hecha la oportuna inspección por la Comisión nombrada, no apareció ingresada en arcas municipales cantidad alguna por tal concepto:

Que la referida Comisión dió cuenta del resultado de sus gestiones a la Corporación municipal en sesión de 20 de Junio del mismo año, y en su vista el Ayuntamiento acordó: primero, que se diera principio, sin levantar mano, a la formación del oportuno expediente administrativo, tomando cuantas declaraciones se juzgaran oportunas para el esclarecimiento de los hechos, autorizando al Alcalde accidental D. Juan Hurtado Gallardo para que actuara en todas las diligencias que se practicasen; y segundo, que a continuación de estas diligencias se pusiera certificación por el Secretario de aquella Corporación, con referencia a lo que resultare de los libros de intervención de los años económicos de 1881-82, de 82-83 y de 83-84, expresando los ingresos que hayan tenido lugar en los expresados periodos, y con toda claridad los que se refieran al capítulo 3.º, art. 6.º, por el arbitrio extraordinario establecido por el aceite que se extrajera de los molinos, a razón de 12 y medio céntimos de peseta por arroba:

Que instruido, en efecto, el expediente a que el acuerdo anteriormente extractado se refiere, se recibieron declaraciones, de las que aparece que para hacer efectivo el impuesto mencionado, se embargaron a algunos vecinos, y se vendieron en pública subasta bienes muebles suficientes a cubrir principal y costas; resultando de la certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento, con relación a los libros de intervención y años económicos de que queda hecho mérito, que en el dicho periodo de tiempo no aparecía que se hubiera efectuado ningún ingreso con cargo al capítulo 3.º, art. 6.º, del presupuesto formado en el año de 1881-82, y por el concepto de arbitrio extraordinario establecido sobre el aceite que se extrajera de los molinos ó particulares:

Que dada cuenta a la Corporación municipal del resultado del expediente instruido, aquella, en sesión extraordinaria del día 19 de Julio de 1886, teniendo en cuenta que estaba suficientemente probado que se cobró en su inmensa mayoría el impuesto de que se trata, y que no apareció ingreso alguno referente al mismo en los libros de intervención y cuentas municipales, acordó que se pasara el tanto de culpa a los Tribunales de justicia para que se averiguara el paradero de dichos fondos, y aclararan las nebulosidades que el mismo asunto encerraba, a cuyo fin habrían de remitirse inmediatamente por el Presidente de la Corporación todos los antecedentes que sobre el particular existieran al Juzgado de instrucción del partido:

Que el Alcalde de Palenciana remitió al Fiscal de la Audiencia copia del expediente instruido, y del que ya se ha hecho referencia, denunciando los hechos que del mismo aparecía, denuncia que a su vez el Fiscal formuló ante la Audiencia de lo criminal de Montilla, la cual tuvo por hecha, remitiendo en su consecuencia los antecedentes al Juez de instrucción de Rute, para que procediera a instruir el oportuno sumario cuidando dicho Juez si resultasen indicios de criminalidad contra el Alcalde y Concejales de la época a que la denuncia se refería, suspender el procedimiento y remitir lo actuado a aquella Sala:

Que practicadas las oportunas diligencias criminales el Juez elevó lo actuado a la Superioridad, y antes de que ésta declarara procesados a individuo alguno, el Gobernador de la provincia, a instancia de D. Rafael Paz Escalera, Alcalde que fué de Palenciana, y de acuerdo con la Comisión provincial, requirió de inhibición a la Autoridad judicial, fundándose en que hallándose en estado de sumario la referida causa, había de conocer y conocer de ella, por delegación de la Audiencia de Montilla, el Juzgado instructor de Rute, y que a este procedía dirigir el requerimiento de inhibición, con arreglo al art. 5.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, a fin de que dejara expedita la vía administrativa en este asunto, toda vez que a la Administración correspondía exigir la responsabilidad a que se hubieran hecho acreedores el Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de Palenciana por falta de ingresos en las arcas municipales de lo recaudado por el arbitrio establecido sobre el aceite en el año de 1881-82, según terminantemente previene el art. 158 de la ley Municipal y órdenes de 2 de Diciembre de 1873 y 11 de Febrero de 1884; en que según preceptúa el art. 181 de la referida ley, la responsabilidad será exigible a los Concejales, ante la Administración, ó ante los Tribunales,

según la naturaleza de la acción u omisión que la motive, y solo será extensiva a los Vocales que hubieren formado parte en ella, punto que faltaba por dilucidar en el expediente que el Ayuntamiento de Palenciana en 1886 siguió contra la Corporación anterior, así como si hizo uso de los procedimientos de apremio, con arreglo a la instrucción de 3 de Diciembre de 1869, y posterior de 20 de Mayo de 1884, dictada para hacer efectivos los débitos en favor de la Hacienda pública, y extensivos a la municipal por la ley de arbitrios de 23 de Febrero de 1870 y art. 152 de la orgánica vigente de 2 de Octubre de 1877; en que conforme al Real decreto de 16 de Septiembre de 1887, tratándose como se trataba de la inversión de fondos municipales, mientras la Administración no censurase y aprobara las cuentas de ingresos y gastos, existía una cuestión previa administrativa que resolver, y de la cual podía depender el fallo que en su día dictaren los Tribunales del fuero común, encontrándose por lo tanto la presente contienda comprendida en uno de los casos en que por excepcion pueden los Gobernadores suscitarse en los juicios criminales, con arreglo al número 1.º, art. 3.º, del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que hallándose la causa en la Superioridad, el Juez remitió a ésta el oficio inhibitorio del Gobernador, devolviéndoselo la Audiencia con las demás actuaciones por encontrarse aún la causa en sumario, para que aquel sustentara el conflicto jurisdiccional:

Que sustanciado el incidente, el Juez dictó auto declarando su competencia para la instrucción del sumario, alegando que las facultades exclusivas que el artículo 72 de la ley Municipal atribuye a los Ayuntamientos para el gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos, entre los que se comprenden la determinación, repartimiento, recaudación, inversión y cuenta de todos los arbitrios é impuestos necesarios para la realización de los servicios municipales, no implica que precisamente, y en todo caso haya de existir una cuestión previa administrativa que resolver, para proceder criminalmente contra quien ó quienes aparezcan responsables de malversación de los fondos municipales, antes por el contrario, ese gobier-

de los intereses pecu-
de los pueblos compete á los
atamientos celosos á obrar, como
hizo el de Palencia, denunciando
los hechos que pueden ser constituti-
vos de delito, sin perjuicio de pro-
curar administrativamente el reintegro
de las cantidades malversadas por los
medios de apremio que autoriza y
ordena el art. 152 de la citada ley;
que el art. 158 de la misma, y las dis-
posiciones que se citan como comple-
mentarias ó explicatorias de él, en
nada se oponen á que desde luego se
proceda por la jurisdicción ordinaria
á la averiguación y castigo en su caso
de los delitos que hayan podido cometer
los agentes de la recaudación mu-
nicipal, pues ello no perjudica la ac-
ción administrativa encaminada á es-
clarecer si ha habido negligencia ú
omisión probada, en cuya virtud re-
caiga en el Ayuntamiento la respon-
sabilidad civil, muy lejos de repeler-
se uno y otro procedimiento, se com-
pletan hasta el punto de que la falta
de cualquiera de ellos motivaría el in-
cumplimiento de las leyes, sería un
escarnio para la justicia, y un poco
de avance en la desmoralización
administrativa; que la disposición
del art. 165 de la repetida ley Mu-
nicipal, que atribuye á los Goberna-
dores y al Tribunal de Cuentas del
Reino la aprobación de las que han
de rendir los Ayuntamientos, tam-
poco es óbice para que los procesos
criminales incoados por denuncia de
una Corporación municipal, previo
expediente del que aparezca no ha-
berse registrado en los libros la entra-
da y salida de los fondos recaudados,
se continúen y terminen ventilando la
Administración, si existen ó no otras
responsabilidades, y contra quienes,
para hacerlas efectivas por los medios
de que dispone, que la atribución de
aprobar las cuentas tiene, entre otros
objetos, el de averiguar si se ha co-
metido una malversación de que no
se tenía noticia, ni siquiera sospecha
alguna, para pasar el tanto de culpa á
los Tribunales ordinarios á quienes in-
discutiblemente corresponde esclarecer
los hechos y castigar los que sean pu-
nibles, lo cual demostraba que cuan-
do antes de presentarse las cuentas,
se conocía ó había indicios bastantes
á creer en la existencia de una malver-
sación de caudales, era innecesario y
altamente perjudicial para la adminis-
tración de justicia en lo criminal pa-
ralizar el procedimiento, y no debía
pretenderse alegando la prescripción
legal citada; que no era pertinente la
cita del art. 181, pues no se justifica-
ba por él la excepción de la cuestión
previa, y antes al contrario, más bien
podía aducirse como fundamento para
probar lo improcedente de la compe-
tencia suscitada; que el Real decreto
de 16 de Septiembre de 1837 no ta-
nía aplicación al caso, pues en él se
ventilaba una cuestión de inversión
de fondos que podía ser mas ó menos
acertada, lo que correspondía decidir
á quien hubiera de aprobar las cuen-
tas, y en el caso de estos autos se tra-
taba de un punto administrativamente
comprobado de haber dejado de
hacer constar determinados ingresos,
hecho que no podía subsanarse con
la presentación de unas cuentas, aun-
que pudieran ocultarse, confeccionán-
dolas tan artificiosa y mañosamente
que no se notase la falta, bastando
para ello con no figurar en cargo lo
que ya se había ocultado en los li-
bros correspondientes; que contra la
doctrina sustentada en el oficio de
requerimiento de ser en todo caso
preciso el examen de las cuentas
municipales por la Autoridad ó Centro
correspondiente, citaba el art. 262 de
la ley de Enjuiciamiento criminal,
que impone al que por razón de su

cargo tenga conocimiento de un deli-
to la obligación de denunciar, por el
cual el Ayuntamiento de Palencia
obró al denunciar los hechos, porque
se procede de una manera legal, y era,
por lo tanto, una consecuencia inelu-
dible en los Tribunales de justicia el
conocer de un hecho que solo es jus-
ticial con arreglo al Código penal;
que según se deducía de las conside-
raciones expuestas, no aparecía la
existencia de cuestión alguna previa
que debiera resolver la Administra-
ción, por lo que no se justificaba el
requerimiento de inhibición prohibido
por regla general á los Gobernadores
en las causas criminales:

Que el Gobernador, de acuerdo con
la Comisión provincial, insistió en su
requerimiento, resultando de lo ex-
puesto el presente conflicto, que ha
seguido sus trámites:

Visto el art. 165 de la ley mu-
nicipal vigente, según el cual la aproba-
ción de las cuentas municipales, cuan-
do los gastos no excedan de 100.000
pesetas, corresponde al Gobernador,
oída la Comisión provincial; y si exce-
diere de esa suma, el Tribunal de
Cuentas del Reino, previo informe
del Gobernador y de la Comisión
provincial:

Considerando:

1.º Que debiendo examinarse y
discutirse las cuentas municipales por
la Junta que al efecto determina la ley
practicando cuantas diligencias é in-
formaciones crea necesario, y debien-
do aprobarse ó desaprobarse después
por el Gobernador ó el Tribunal de
Cuentas, es indudable que á estos
Centros y Corporaciones compete de-
terminar si se han invertido ó no, con
arreglo á la ley, las cantidades re-
caudadas, ó si esas cantidades han
sido distraídas ó malversadas, dedi-
cándolas á objetos distintos de aque-
llos para que estaban destinadas.

2.º Que tratándose en el presente
caso de si el Ayuntamiento de Pa-
lencia aplicó ó no al objeto para
que estaba destinado al arbitrio im-
puesto al aceite que se extrajera de
los molinos ó depósitos particulares,
y de si hizo ó no constar en los libros
de intervención lo ingresado por tal
concepto, estas cuestiones caen bajo el
imperio de disposiciones administrati-
vas; y por lo tanto, su examen y cen-
sura, en primer término, corresponde
á las Autoridades gubernativas al exa-
minar y aprobar las oportunas cuen-
tas.

3.º Que mientras este examen no
haya tenido lugar y se haya dictado
la resolución administrativa proceden-
te, existe una cuestión previa, cuya
decisión puede influir en el fallo que
dicten los Tribunales del fuero común.

4.º Que se está, por lo tanto, en
uno de los casos en que por excep-
ción pueden los Gobernadores suscitarse
contendidas de competencia en los ju-
icios criminales con arreglo al núme-
ro 1.º, art. 3.º del Real decreto de 8 de
Septiembre de 1837.

Conformándose con lo consultado
por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey D. Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia
á favor de la Administración.

Dado en Palacio á cuatro de Mayo
de mil ochocientos noventa y uno.—
Maria Cristina.—El Presidente del
Consejo de Ministros, Antonio Cánovas
del Castillo.

REALES DECRETOS

Visto el expediente instruido con
motivo de la instancia elevada por Jo-
sefa Román pidiendo que se indulte
á su hijo Francisco Sanduvete Ro-
mán de la pena de diez y siete años;
cuatro meses y un día de reclusión
que la Audiencia de Sevilla le impu-
so en causa por el delito de homi-
cidio:

Considerando que el reo lleva cum-
plidos más de catorce años de su
condena, y que por haber cometido
con anterioridad un delito de lesiones
penadas con una multa, no ha podido
aplicársela ninguno de los indultos
generales de 1879, 1880, 1886 y 1890;

Teniendo presente lo dispuesto en
la ley provisional de 18 de Junio de
1870, que reguló el ejercicio de la
gracia de indulto:

De acuerdo con el informe de la
Sala sentenciadora; con lo consultado
por el Consejo de Estado, y con el
parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey D. Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,

Vengo en indultar á Francisco
Sanduvete Román del resto de la pe-
na de diez y siete años, cuatro meses
y un día de reclusión á que fué con-
denado en la causa de que se ha he-
cho mérito.

Dado en Palacio á cuatro de Mayo
de mil ochocientos noventa y uno.—
Maria Cristina.—El Ministro de Gra-
cia y Justicia, Raimundo Fernandez
Villaverde.

Visto el expediente instruido con
motivo de la instancia elevada por Ni-
colás Juan Mari pidiendo indulto de
la pena de doce años y un día de re-
clusión que la Audiencia de Pamplona
le impuso en causa por el delito de homi-
cidio:

Considerando que en la sentencia
se apreció la circunstancia atenuante
muy calificada de haber obrado el
reo al delinquir en vindicación de
una ofensa gravísima inferida á su
honra:

Teniendo presente lo dispuesto en
la ley provisional de 18 de Junio de
1870, que reguló el ejercicio de la gra-
cia de indulto:

Tomando en consideración el in-
forme de la Sala sentenciadora, que
opina por la remisión total de la pena;
de acuerdo con lo consultado por el
Consejo de Estado, y con el parecer
de mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey D. Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,

Vengo en conmutar la pena de do-
ce años y un día de reclusión á que
fué condenado Nicolás Juan Mari por
la de seis años y un día de prisión
mayor.

Dado en Palacio á cuatro de Mayo
de mil ochocientos noventa y uno.—
Maria Cristina.—El Ministro de Gra-
cia y Justicia, Raimundo Fernandez
Villaverde.

Vista la propuesta elevada por el
Director general de Establecimientos
penales interesando el indulto de
Juan Ponce Gil, condenado por la
Audiencia de Sevilla á la pena de
quince años de reclusión en causa
por el delito de homicidio:

Considerando que el reo lleva
cumplidos mas de doce años de
condena y que el servicio prestado,
fundamento de la propuesta, con-
sistió en haber capturado él y otro
compañero, con peligro de su vida,
á dos presidiarios condenados á ca-
dena perpetua:

Teniendo presente lo dispuesto
en la ley provisional de 18 de Ju-
nio de 1870, que reguló el ejerci-
cio de la gracia de indulto:

De acuerdo con la propuesta del
Director de Establecimientos pena-
les; con el informe de la Sala sen-
tenciadora; con lo consultado por
el Consejo de Estado, y con el pa-
recer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,

Vengo en indultar á Juan Ponce
Gil del resto de la pena de quin-
ce años de reclusión á que fué
condenado en la causa de que se
ha hecho mérito.

Dado en Palacio á cuatro de
Mayo de mil ochocientos noventa y
uno.—Maria Cristina.—El Ministro
de Gracia y Justicia, Raimundo
Fernandez Villaverde.

Visto el expediente instruido con
motivo de la instancia elevada por
Maria Villalba pidiendo que se in-
dulte á su esposo Vicente Monfort
Pejo de la pena de tres años, seis
meses y veintin días de presidio
correccional que la Audiencia de
Castellón le impuso en causa por
el delito de malversación de cauda-
les públicos:

Teniendo en cuenta la buena con-
ducta del reo, anterior y posterior
al delito, que reintegró la cantidad
malversada y lleva cumplida mas
de la mitad de su condena:

Vista la ley provisional de 18 de
Junio de 1870, que reguló el ejer-
cicio de la gracia de indulto:

Oído el Consejo de Estado; de
acuerdo con el informe de la Sala
sentenciadora, y con el parecer de
mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,

Vengo en indultar á Vicente Mon-
fort Pejo del resto de la pena de tres
años, seis meses y veintin días
de presidio correccional á que fué
condenado en la causa de que se
ha hecho mérito.

Dado en Palacio á cuatro de
Mayo de mil ochocientos noventa
y uno.—Maria Cristina.—El Minis-
tro de Gracia y Justicia, Rai-
mundo Fernandez Villaverde.

A propuesta del Ministro de
Marina, de acuerdo con el Conse-
jo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Ministro de Marina para presentar á las Cortes el unido proyecto de ley de Pesca Marítima.

Dado en Palacio á seis de Mayo, de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Marina, José Maria de Beránger.

EXPOSICION A LAS CORTES

En la exposicion del proyecto de ley presentado á las Cortes en 12 de Febrero de 1889, se ponen de manifiesto, á la par que la importancia de las industrias pesqueras y su influencia en la prosperidad de los pueblos y en el aprendizaje y formacion de gente marinera que tripule los buques nacionales de guerra y del comercio, la necesidad misma de una ley por que se rija debidamente materia hasta ahora sujeta á disposiciones menos solemnes y obligatorias, y por lo mismo no tan eficaces como es regular conveniente.

Tambien se trazaba en aquella exposicion un cuadro de las principales mejoras y ventajas que en el proyecto de ley se establecian, y aqui reproducido este ahora, aun mas estudiado y completo con las variaciones que el Senado, donde se discutió y aprobó entonces, tuvo á bien hacer, parece tener mas cuidadosamente procuradas las mismas calidades de oportunidad y de eficacia, y es de creer que principalmente las facilidades que al ejercicio de la industria se otorgan y las penas que para los infractores de la ley y de los reglamentos se establecen, ó como en aquella exposicion se dice y se resume una libertad bien entendida, una proteccion ilustrada y una vigilancia escrupulosa, den por resultado el progresivo desarrollo de las industrias pesqueras en la proporcion que las riquezas de nuestras aguas litorales hacen esperar.

Por lo tanto el Ministro que suscribe tiene el honor de presentar á las Cortes el unido proyecto de ley.

Madrid 6 de Mayo de 1891.—El Ministro de Marina, José Maria de Beránger.

PROYECTO DE LEY

TÍTULO PRIMERO

Objeto de la ley

Artículo 1.º La presente ley ordena la pesca y cultivo de las aguas del mar en sus senos y golfos, puertos, lagunas, y demás charcas ó estanques, albuferas, estuarios, canales y rios que á él desaguan, siendo el limite en ellos el punto á que alcanzan las mareas mas altas.

Art. 2.º Para los efectos de esta ley se entiende por linea de costa la de mas baja marea á lo largo de las playas, y en los puertos, rios, radas y ensenadas la linea recta que une las puntas que los limita.

Art. 3.º La extension de las aguas territoriales para los fines de la pesca alcanza á seis millas mar á dentro, contadas desde los puntos señalados en el artículo anterior.

En los bancos que pertenezcan á los dominios españoles, estén á la distancia que quiera de la costa, se observarán las mismas disposiciones señaladas en este y en el precedente artículo.

Art. 4.º Fuera del limite marcado en los artículos precedentes, la pesca es libre.

Art. 5.º El ejercicio de la pesca á flote corresponde á todos los españoles que pertenezcan á la inscripcion mari-

tima en las industrias á flote de pesca y navegacion.

La pesca desde tierra podrá hacerla todo el que se halle provisto de licencia especial expedida por la Autoridad de Marina.

Art. 6.º Fuera de los puertos, rias, rios y abrigos especiales, pero dentro del limite de las aguas territoriales, los artes que no sean voluntarios, se condicionarán por los reglamentos, en cuanto á la luz de sus mallas, pero no respecto á sus dimensiones. Los artes de tiro cobrados desde tierra, en la zona de que se trata, solo podrán funcionar en los sitios, en las épocas y del modo que definan los reglamentos. Los artes de arrastre, aunque sean de tiro, no rozando el fondo, podrán pescar sin inconveniente durante las costas á que dichas redes se dedican. Los arrastres remolcados por embarcaciones, quedan completamente prohibidos en aguas territoriales.

Art. 7.º No se permitirá establecer artes ó aparatos fijos que atañen la pesca en los canales y parte de los rios, á los que alcanzan las aguas.

Tampoco se permitirá colocar los artes delante de la boca de los puertos, rios ó canales hasta la distancia de una milla, de modo que estorben el libre tránsito de los peces.

Art. 8.º Aparte de las vedas y restricciones normales que los reglamentos establezcan para proteger las crias y el desove en los puertos, rias y abrigos especiales que se hayan reconocido como necesarias para el objeto, el Ministro de Marina podrá decretar el acotamiento absoluto parcial, esto es, de una zona dada, en estos puertos, rias y abrigos, por un tiempo determinado de uno ó mas años, cuando el estudio é informaciones correspondientes resulte demostrada su necesidad para la conservacion de ciertas especies que se temen desaparezcán ó para lograr la repoblacion de las aguas.

Art. 9.º En las aguas de propiedad particular solo podrá pescar el dueño y los que este autorice por escrito, no contrariando las disposiciones de esta ley y las de los reglamentos que el Gobierno dicte para su ejecucion y cumplimiento, en los cuales se consignarán especialmente las prohibiciones referentes al sitio, al tiempo, instrumentos de pesca y modo de usarlo, al transporte de la pesca y comercio de esta durante la veda, y, por fin al régimen de las aguas en consonancia con las disposiciones generales de la presente ley.

Art. 10. Son aguas de propiedad privada las concedidas por el Estado para establecimientos de piscícolas ostrícolas y de propagacion de otros seres marinos, para pesquerías determinadas.

Art. 11. Tales concesiones no podrán hacerse cuando la instalacion de los establecimientos mencionados resulten: 1.º entorpecimientos ó estorbos para la libre navegacion y circulacion de los peces; 2.º perjuicios evidentes para el procomún, y 3.º iguales resultados de un modo directo á las pesquerías anteriormente concedidas en la localidad.

Art. 12. Las concesiones para pesquerías y establecimientos industriales de acuicultura marítima, podrán anularse cuando el concesionario las abandone ó no enmpla con las condiciones especiales de la concesion.

Tambien podrán ser anuladas cuando motivos de conveniencia pública así lo aconsejen, previa indemnizacion.

Art. 13. El Ministerio de Marina es el Centro administrativo de todo lo referente á pesca en las aguas de su jurisdiccion, así como de lo pertinente al cultivo de las mismas para hacerlas productivas. Por lo tanto, solo dicho Centro podrá entender las concesiones

y anulacion de las mismas á que se refieren los precedentes artículos.

TÍTULO II

Del ejercicio de la pesca.

Art. 14. Queda prohibido de un modo absoluto el uso de la dinamita y cualquier otra materia explosiva para matar la pesca, sean cuales fueren las condiciones de las localidades.

Art. 15. Las balas y cohetes explosivos solo podrán emplearse en la captura de los grandes cetáceos, con las precauciones convenientes para evitar desgracias personales.

Art. 16. Se prohíbe igualmente envenenar ó inficionar las aguas de ningún modo con el fin de matar, embriagar ó atontar la pesca, tanto en las aguas del dominio público como el privado.

Art. 17. Queda tambien prohibido:

1.º Pescar con luz artificial y pescar de noche, fuera de los casos que señalen los reglamentos especiales.

2.º Establecer estorbos de cualquier clase que sean para impedir el libre curso de los especies acuáticas por el litoral, por los esteros, embocaduras de los rios y su curso hasta donde remontan las especies que vienen á criar en las aguas dulces, y de donde bajan las que van á criar al mar. Con este motivo, los reglamentos fijarán de un modo claro las condiciones á que habrán de atenerse las pesquerías y artes con los que la industria pueda ejercerse en tales lugares.

3.º Alterar ó descomponer los fondos donde desovar las especies, destruir las parvas de huevos en tales sitios depositados, y arrancar la vegetacion acuática de las localidades donde se refugian las crias para desarrollarse.

4.º Apalear las aguas, arrojar piedras y espantar de cualquier otro modo la pesca para obligarla á penetrar forzosamente en los artes propios ó desviarla de los agenos.

5.º Macerar ó cocer el esparto ó cualquier otra sustancia que en poco ni en mucho pueda alterar las condiciones salubres de las aguas litorales y de los lagos marítimos, estuarios y desembocadura de los rios, y canales que vierten en la mar.

6.º Arrojar de los establecimientos industriales situados en las orillas del mar, sustancias nocivas á la salubridad de las mismas, en los términos establecidos por la ley de Aguas.

7.º Destruir, inutilizar ó variar del punto donde fueren depositados los aparatos de incubacion artificial por persona debidamente autorizada.

Enturbiar las aguas en que se encuentran sumergidos semejantes incubadores y arrojar materias que puedan perturbar el desarrollo de los gérmenes ó matarlos.

8.º Usar cualquier clase de redes ó aparatos que puedan producir los daños señalados en el párrafo tercero del presente artículo, ó que, empleándolos para la captura de peces adultos, sean tales sus condiciones que puedan coger tambien ó perjudicar sus crias. En este concepto, los reglamentos señalarán de un modo taxativo cuales son los artes que deben quedar comprendidos en la prohibicion que se señala en este artículo; los que deban emplearse en la pesca de determinadas especies ó indiferentemente en la de todas, y el modo, por fin, de usarlo, para que mal empleados no resulten perjudiciales.

Art. 18. Durante la reproduccion queda prohibida de un modo absoluto la pesca de todas las especies, tanto en las aguas de dominio público como privado. Los reglamentos señalarán la

época correspondiente á la veda de cada uno.

Art. 19. Pasada la época de veda, subsistirá la prohibicion de capturar las crias, y los pescadores las devolverán inmediatamente al agua cuando las encuentren presos en los artes que usen ó en cualquiera clase de pesquerías que sean.

Art. 20. Cuando amenace la desaparicion de una especie ó sea notable su desaparicion, la Administracion del ramo podrá prorrogar la veda de su pesca todo el tiempo necesario para evitar semejante daño.

Art. 21. Queda terminantemente prohibida la circulacion y venta de peces, mariscos y crustáceos durante la temporada de su respectiva veda, y, en todo tiempo, la de las crias que no alcancen las dimensiones legales que señalen los reglamentos.

Art. 22. El Gobierno podrá autorizar, cuando lo estime conveniente, y con las precauciones que dicte, la pesca de crias y huevos vivos y su transporte con destino exclusivo á la reproduccion y repoblacion de las aguas españolas y al estudio en los establecimientos biológicos públicos en España.

Continuará.

ANUNCIOS OFICIALES

INSPECCION

DE LA COMANDANCIA CENTRAL, DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR.

Negocio de conversion

Habiendose recibido en este Centro los ajustes rectificados y definitivos de los individuos que se expresan á continuacion, se les hace presente que, según lo dispuesto en la regla 5.ª de las instrucciones publicadas en la *Gaceta* de 24 de Agosto de 1882 y Real orden de 17 de Marzo de 1891 (Coleccion legislativa núm. 118), deben solicitar de esta Inspeccion la conversion del crédito que les resultó á su baja en el Ejército de Cuba. La instancia, extendida en papel del sello 12.º, deberá ser remitida al Inspector, por conducto de la Autoridad civil ó militar respectiva, en union del bono original y copia de la licencia absoluta del individuo á que se refiera, autorizada esta última por un Comisario de Guerra, ó por el Alcalde de la localidad.

Brigada de transportes

Botallon cazadores de Isabel II.

Soldado José Gonzalez Lara, natural de Villanueva, provincia de Málaga.

Idem José Gonzalez Muñoz, natural de Badajoz.

Idem Basilio Guillén Lara, natural de Pelo, provincia de Teruel.

Idem Sebastian Guarte Esterare, natural de Guibon, provincia de Teruel.

Regimiento Infanteria de Tarragona.

Soldado Vicente Menguado Bartona, natural de Onda, provincia de Valencia.

Idem Francisco Medina Jiménez, natural de Alcalá la Real, provincia de Jaén.

Idem Francisco Méndez Gomez, natural de Villacieza, provincia de Oviedo.

Idem Juan Mediro Alcalde, natural de Alpuciel, provincia de Granada.

Idem Pablo Mechoa Zarragozán, natural de Jaca, provincia de Huesca.

Idem Rafael Mesquida Rech, natural de Payo, provincia de Alicante.

Idem Roque Meda Mirgale, natural

de Vitor Galla, provincia de Castellón.
Idem Ramon Martinez Montes, ha-
cedor de Leon. Pasa de la 1.ª a la 2.ª
Idem Rufino Marique, Elbrer, natu-
ral de Madrid. Pasa de la 1.ª a la 2.ª
Idem Santiago Martinez Clemente, na-
tural de Pozo Arzobispo, provincia del
Teruel. Ob esalo de la 1.ª a la 2.ª
Idem Sebastian Martin Alonso, natu-
ral de Macha, provincia de Sevilla.
Idem Batallon cazadores de la Union. Na-
tural de Macha, provincia de Sevilla.
Idem Soldado José Mompell, Carollan, na-
tural de Palenque, provincia de Case-
rellon.
Idem Isidro Mesegut Barrios, natu-
ral de Bergas, provincia de Barcelona.
Idem Agustín Millan Cobos, natural
de Ubeda, provincia de Jaén.
Idem Patricio Rodríguez Marroquí.

Regimiento Infanteria de la Habana.

Soldado Vicente Albero Alrero.

Regimiento Infanteria del Rey.

Soldado Francisco Gomez Antonanza.

Regimiento Infanteria de Nápoles

Soldado Demetrio Santos Gonzalez.

Regimiento Infanteria de Villas.

Soldado Mariano Solares Castello.

Idem Manuel Segura Delgado.

Regimiento Cabailleria de Palmira.

Soldado Julian Selma Saniper.

Idem José Solsano Mar.

Batallon cazadores de Colon.

Soldado José Salon Vidal.

Guardia civil.

Cabo Jorge Martinez Heredia.

Brigada de transp. rtes.

Soldado Ginés Sanchez Hernandez.

Idem Gregorio Sarrica Tribuco.

Idem José Vallejo Simon.

Idem Manuel Soto Castaño, natural
de Banoro, provincia de Leon.

Idem Pedro Solans Nadal, natural
de Corguon, provincia de Sevilla.

Idem Miguel Solares Rives, natural
de Foyal, provincia de Murcia.

Idem Juan Soria Flores, natural de
Alba, provincia de Salamanca.

Idem José Soler Casanova, natural
de Santo Olanja, provincia de Barce-
lona.

Idem Juan Soler Masidon, natural
de Lérida.

Idem Cesareo Sobrino Casado, natu-
ral de Bolaños, provincia de Ciudad
Real.

Idem Ramon Sierra Coll, natural de
San Martin, provincia de Oviedo.

Idem José Simos Pons, natural de
Yalsebre, provincia de Barcelona.

Idem Manuel Seco Aliago, natural
de Terrillosa, provincia de Ciudad
Real.

Idem Santos Segui Incognito, natu-
ral de Sinos, provincia de Orense.

Idem José Sexto Castro, natural de
Gambra, provincia de la Coruña.

Idem Ramon Sastre Segarra, natural
de Velellan, provincia de Huesca.

Idem Santiago Santri Gutierrez, na-
tural de Zoloparado, provincia de Leon.

Idem Segundo Santa Maria Garcia,
natural de Teseda, provincia de Bur-
gos.

Idem Antonio Serrano, Perez, natu-
ral de Cepandillo, provincia de Cuenca.

Idem Bautista Semitero Montefi, na-
tural de Pueyo, provincia de Valencia.

Idem Valero Serrano Montero, natu-
ral de Robietos, provincia de Teruel.

Idem Cecilio Sedano Vega, natural
de Burgos.

Idem Francisco Serrano Robles, na-
tural de Estepa, provincia de Sevilla.

Idem Joaquin Segura Clavel, natu-
ral de Fresno de provincia de Toledo.

Idem Juan Sanchez Gallego, natu-
ral de Lorca, provincia de Murcia.

Idem Manuel Sanz Onoro, natural
de Lulu, provincia de Huesca.

Idem Juan Santos Pinedo, natural de
Burgos.

Idem Manuel Sanchez Serraduro, na-
tural de Morelli, provincia de Badajoz.

Idem Pedro Salmonte Alonso, natu-
ral de la Coruña.

Idem Victoriano Sanchez Incognito,
natural de Pontevedra.

Idem Celestino Suarez Bellin, natural
de Sama, provincia de Oviedo.

Idem Juan Sereira Rivas, natural de
Monistrol, provincia de Barcelona.

Idem Eusebio Suarez Fernandez, na-
tural de Oviedo.

Idem Juan Saez Perez, natural de
Burgos.

Idem Juan Sans Mencia, natural de
Huertas, provincia de Guadalajara.

Idem Juan Salcedo Maurano, natural
de Rubite, provincia de Granada.

Idem José S. Gregorio Pascual, na-
tural de Zamora.

Idem Juan Salcedo Manzano, natural
de Rubitos, provincia de Granada.

Idem José S. Gregorio Pascual, na-
tural de Gamores, provincia de Za-
mora.

Idem José Sanchez Millán, natural
de Jumerá, provincia de Málaga.

Idem José Sanchez Fernandez, natu-
ral de Cogollos de Guadix, provincia de
Granada.

Idem José Salciade Velarde, natural
de Brilla Brille, provincia de Oviedo.

Idem José Santos Velarde, natural
de Sullares, provincia de Sevilla.

Idem Joaquín Sastre Gonzalez, natu-
ral de Pego, provincia de Alicante.

Idem Gregorio Sanchez Mora, natu-
ral de Calatayud, provincia de Zaragoza.

Idem Eugenio San Vicente Larraspo,
natural de Basal, provincia de Huesca.

Idem Deogracias San Julian Julian,
natural de Arracosepa, provincia de
Cuenca.

Idem Diego Sanchez Romero, natural
de Málaga.

Idem Valeriano Delgado Morales,
natural de Peña, provincia de Orense.

Idem Alfonso Sanchez Lopez, natu-
ral de Muñon, provincia de Guada-
lajara.

Idem Antonio Sanchez Sanchez, na-
tural de Juaba, provincia de Almería.

Idem Eustaquio Sanchez Garcia, na-
tural de Aranjuez, provincia de Madrid.

Idem Antonio Solares Colls, natu-
ral de Bultrán, provincia de Barcelona.

Idem Juan Rodriguez y Mayor, natu-
ral de Cubinas, provincia de Orense.

Idem Juan Romero Llanes, natural
de Guadabana, provincia de Sevilla.

Idem Joaquin Rodriguez Rivera, na-
tural de Padrenda, provincia de Orense.

Idem Luis Rodriguez Cenon, natural
de Valencia.

Idem Manuel Rodriguez Gomez, na-
tural de Pera, provincia de Lugo.

Idem Vicente Seamon Raya, natu-
ral de Castañosa, provincia de Valencia.

Idem Mariano Ramos Llirio, natu-
ral de Acmes, provincia de Huelva.

Idem Domingo Ramirez Garcia, na-
tural de Avila, provincia de Murcia.

Idem Pedro Pelaez Incognito, natu-
ral de Ariña, provincia de Lugo.

Idem José Pereira Martin, natural de
Bara, provincia de Pontevedra.

Idem Pedro Perez Lopez, natural de
Santa Maria de la Cabeza, provincia de
Lugo.

Idem José Pereira Varela, natural de
Corcubion, provincia de Pontevedra.

Idem José Perez Exposito, natural
de Sedes, provincia de la Coruña.

Idem Juan Perez Sanchez, natural
de Vuenama, provincia de Salamanca.

Idem Rabillo Berilla Carbo, natu-
ral de Satura, provincia de Barcelona.

Idem Mateo Perez Jimenez, natu-
ral de Rio de Erba, provincia de Teruel.

Idem Manuel Pereira Rios, natu-
ral de Gercira, provincia de la Coruña.

Idem Julian Perez Soto, natural de
Huelva, provincia de Toledo.

Idem Rosendo Perez Pando, natu-
ral de Santo Tomás, provincia de Orense.

Idem Rufino Perez Incognito, natu-
ral de Pepón, provincia de Orense.

Idem Ricardo Perez Camine, natu-
ral de Alcalá Real, provincia de Jaén.

Idem Francisco Ruiz Jaquel, natu-
ral de Arlés, provincia de Lérida.

Idem Carlos Ruiz Juster, natural de
Agosti, provincia de Alicante.

Idem Antonio Ruiz Garcia, natu-
ral de Pedro Muñoz, provincia de Ciudad
Real.

Idem Juan Ruiz Perez, natural de
Lorca, provincia de Murcia.

Idem Juan Ruiz Espinosa, natural de
Castillejos, provincia de Jaén.

Idem Ramon Ruiz Garcia, natu-
ral de Terret, provincia de Málaga.

Idem Felipe Rodriguez Espinosa, na-
tural de Farneda, provincia de León.

Idem Francisco Rodriguez Incognito,
natural de Sarriá, provincia de Bar-
celona.

Idem Tomás Rodriguez Hernández,
natural de Robledo Rosa, provincia de
Zamora.

Idem Serafin Rodriguez Garcia, na-
tural de Sote, provincia de Logroño.

Madrid 30 Abril de 1891.—El Gene-
ral Inspector H. Valdés.

Nota. Las indicaciones de los pue-
blos y provincias están echas con ar-
reglo a los datos remitidos por los cuer-
pos de Cuba.

UNIVERSIDAD LITERARIA

DE SANTIAGO

Los Maestros de escuelas públicas
de la categoría de oposicion que has-
ta el 15 del actual soliciten ejercicios
de mejora de sueldo, se presentarán
en esta ciudad el día 24 del corriente
mes.

Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados.

Santiago 11 de Mayo de 1891.—
El Rector, J. Gil.

TRIBUNALES

MUNICIPALES.

Don Manuel Vallejo Somoza, Juez
municipal del término de Moreiras.

Hago saber: que hallándose vacan-
te la Secretaría en propiedad de
este Juzgado municipal, por renuncia
de D. José Osorio Puga nombrado
por la Audiencia territorial de la Co-
ruña en 31 de Mayo último de 1890,
el cual se hallaba con licencia por
término de 30 días; se hace saber al
público para que los que á ella quie-
ran optar y reúnan las cualidades de-
terminadas por la ley del Poder judi-
cial y Reglamento de 10 de Abril de
1871, presenten sus solicitudes docu-
mentadas en la Secretaría de este
Juzgado dentro del término de 15
días, contados desde la insercion del
presente, en el Boletín oficial de la
provincia.

Moreiras 6 de Mayo de 1891.—El
Juez municipal, Manuel Vallejo.—El
Secretario habilitado, Manuel Joga.

ANUNCIOS

GRANDES REBAJAS DE PRECIOS

CARRETES HILO SINGER

calidad superior, de 500 yardas cada
carrete, todos los números y colores á
pesetas 0'35 ¡siete perras chicas!

CARRETES SEDA SINGER

calidad superior, de media onza cada
carrete, todos los números y colores á
pesetas 0'75 ¡tres realitos!

De venta en todas las sucursales de
LA COMPAÑIA FABRIL SINGER

EN ORENSE, PROGRESO, 36

Por demás está decir que, en el mis-
mo establecimiento se hallan de venta
las célebres máquinas para coser de

LA COMPAÑIA FABRIL SINGER

DE NUEVA YORK

entre las que llaman la atención del
público por sus seguridades á la par
que sencillez y buenisimos resultados
las llamadas *Lansadera oscilante y*
Lansadera vibrante.

Pídase el nuevo catálogo que acaba
de publicarse, que se da gratis.

36, PROGRESO, 36



COMPANIA FRANCESA DEL FENIX

AUTORIZADA EN FRANCIA Y EN ESPAÑA

Seguros á prima fija contra incendios
Y SOBRE LA VIDA

Capital social: CINCUENTA Y SEIS
MILLONES DE PESETAS

Su R. representante en Orense

Don Manuel de Sás

Calle del Progreso, núm. 63 y 71.

A voluntad de su dueño se ven-
de la casa núm 12, calle de Piza-
rro de esta ciudad. D. Manuel Lo-
pez Ramos, calle de San Pedro,
número 8, dará razon.— 19

GARCIA Y VILLAR

CIURJANO DENTISTA

Ofrece sus servicios en la calle de
Pereira, núm. 3, piso segundo.

MONTEPIO NACIONAL

IMPOSICIONES, AHORROS Y PRESTAMOS

PARA LAS QUINTAS

(Autorizado por Real orden de 30 d
Junio de 1890)

Direccion: Calle de S. Honorato, 1
Plaza de S. Jaime—Barcelona.

Se facilitan prospectos y todos
los informes necesarios en la Dele-
gacion á cargo de don Evaristo Fer-
nandez Villarino, calle Fuente del
Monte mún. 1.º Orense.

Se vende la mitad de la casa núme-
ro 33 de la calle de Santo Domi-
go de esta ciudad, con un patio ó
huerta contiguo á la misma. Las per-
sonas que se interesen en su adquisi-
cion se apersonarán en la Notaria de
D. Francisco Cuevas.—24

Imprenta LA POPULAR